



## **¿Un cambio de paradigma a la altura del momento?**

*Declaración de la Agrupación Global Unions ante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, octubre de 2023*

---

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el mundo parece sumido en una crisis permanente en la que las sucesivas perturbaciones mundiales han puesto en jaque un sistema económico internacional desigual e inestable. Mientras los beneficios empresariales se disparan y los países más ricos se esfuerzan por preservar sus propias economías, los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo ven cómo se erosiona su poder adquisitivo y los servicios públicos se recortan hasta la médula, al tiempo que los países en desarrollo se han sumido en una grave crisis de endeudamiento. Las mujeres y los grupos vulnerables han sido los más perjudicados, y la desigualdad ha aumentado por primera vez en décadas. Resuenan los llamamientos al cambio de millones de trabajadores y trabajadoras en los piquetes de huelga, las personas refugiadas desplazadas por la guerra y las catástrofes climáticas y los miles de millones de personas cuyos medios de subsistencia, educación y vida se han visto alterados o truncados por la crisis.

Los llamamientos urgentes a la reforma han llegado a las más altas esferas del poder, pero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) responden a las crisis de hoy con el manual de ayer. Las demandas de reforma de las instituciones de Bretton Woods se extienden desde Bridgetown hasta el G20, y los riesgos se ven exacerbados por la expansión de la alianza BRICS y la búsqueda de alternativas. Este año, el Secretario General de la ONU ha publicado un informe político en el que promueve reformas sistémicas de la arquitectura financiera internacional. Las evaluaciones realistas de la situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pintan un panorama desolador y la OIT que llega a la conclusión de que “el mundo está

muy lejos de alcanzar casi dos tercios de los indicadores de progreso del ODS8” y “la comunidad internacional está hoy casi tan lejos de alcanzar las metas del ODS8 como lo estaba en 2015”. Y aunque el Banco y el Fondo insisten en que han cambiado su enfoque, su respuesta a las innumerables crisis a las que se enfrenta el mundo de hoy sigue siendo la de siempre y sigue siendo insuficiente.

En respuesta a las crecientes demandas a favor de una reforma, el Comité de Desarrollo del Grupo del Banco Mundial publicó a principios de este año una *Hoja de Ruta para la Evolución* destinada a la institución. En lugar de aprovechar esta oportunidad para democratizar y revitalizar las actividades del Banco, el documento reafirma el enfoque de “cascada”, centrándose en la financiación del sector privado y en la privatización de los bienes públicos mundiales. Este enfoque sobre las soluciones del sector privado y la primacía financiera también se reflejan en el planteamiento del Banco sobre la protección social, así como en su metodología para el proyecto B-Ready, el sucesor del controvertido informe *Doing Business*, que reitera el debilitamiento de los derechos de la gente trabajadora de la publicación anterior.

El FMI ha introducido cambios analíticos constructivos en su enfoque de la desigualdad, la recaudación de ingresos y el gasto en protección social. No obstante, a pesar de este enfoque matizado y de una necesidad de inversión y liquidez sin precedentes en los últimos años, los países en apuros se enfrentan a las consabidas recomendaciones de recortes salariales, así como recortes en el sector público y el gasto social. A pesar del notable empuje a favor de reformas sistémicas y los incansables esfuerzos por parte de los países endeudados y vulnerables al cambio climático, las perspectivas económicas para la gente trabajadora de países como Argentina, Ghana, Sri Lanka y Túnez no parecen mucho más halagüeñas que durante las décadas perdidas que dejaron las crisis anteriores.

La frustración a escala mundial ante un modelo estancado de financiación internacional del desarrollo es el resultado previsible de décadas de políticas fallidas que recompensaban a los ricos y hacían recaer la carga del sacrificio sobre la gente trabajadora y sus familias. Los retos del momento actual y la frustración de miles de millones de personas brindan la oportunidad de cambiar esa dinámica e iniciar un multilateralismo renovado basado en la solidaridad: un Nuevo Contrato Social que defina nuestro siglo. Sin embargo, para lograrlo, el Banco Mundial y el FMI tienen que aprovecharla.

### **Un estudio de caso: Marruecos, MENA y el continente africano**

Este año, las Reuniones Anuales tendrán lugar en Marrakech, Marruecos. Solo un mes antes del comienzo de las reuniones, un trágico terremoto sacudió la zona, dejando más de 3.000 muertos y miles de heridos. Los terremotos ocurren al azar, pero sus efectos son un reflejo de las decisiones políticas. Se necesita una inversión sostenida en servicios públicos y una reconstrucción caracterizada por la seguridad y la transparencia para evitar aún más pérdidas debidas a esta tragedia. Hacemos un llamamiento a las instituciones de Bretton Woods para que

se comprometan con una reconstrucción que promueva un crecimiento sostenible e integrador en Marruecos aún mucho después de que finalicen las Reuniones Anuales.

Los antiguos retos del norte de África ilustran la necesidad de centrarse en el trabajo decente, el diálogo social y el sector público. Los legados de la Primavera Árabe aún resuenan en la región y muchas de sus causas estructurales subyacentes siguen sin abordarse. Los débiles mercados laborales no han logrado absorber a las personas que obtienen un título, y las oportunidades de empleo seguro son especialmente escasas para la juventud y para las mujeres de la región. Los recortes en el sector público promovidos por las IFI, particularmente en la educación, erosionan no solo una fuente esencial de trabajo decente, sino también un pilar de la igualdad de género en el empleo; la flexibilización y el trabajo precario dejan en mayor desamparo a la gente trabajadora marginada. Esta exclusión estructural del trabajo decente no solo perpetúa el malestar social y la opresión basada en el género, sino que también socava el desarrollo equitativo.

Estos retos no son exclusivos de la región norte de África. Durante años, el Índice Global de los Derechos de la CSI ha identificado a la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) como la peor del mundo en materia de derechos laborales. La escalada de la represión contra los sindicalistas en Túnez representa una tendencia alarmante, pero los países de toda la región siguen socavando los derechos fundamentales en el trabajo de la gente trabajadora. En 2017, Qatar aprobó en particular amplias reformas de la legislación laboral. En cooperación con la OIT y el movimiento sindical mundial, habrá que seguir avanzando hacia la protección de la libertad sindical y la instauración del diálogo social. El propio país anfitrión, Marruecos, está estudiando reformas que pueden restringir el derecho de huelga en el país. Mientras los trabajadores y las trabajadoras esperan una revisión de la postura del Banco Mundial sobre las políticas del mercado laboral, los nuevos planes, como el proyecto B-Ready, resultan indicadores preocupantes, ya que fomentan el empleo precario y la erosión de la protección social. Este enfoque no hará sino enquistar los problemas de la región y obstaculizar el desarrollo de un modelo de crecimiento más sostenible.

Aun cuando muchos países del continente africano gozan de derechos laborales más reforzados que los Estados árabes, luchan contra una crisis de la deuda que socava el trabajo decente y el desarrollo equitativo. En agosto, sindicalistas de más de una docena de países se reunieron en Dakar en un Taller Continental sobre Deuda Soberana para abordar los acuciantes problemas de la deuda en África e instaron a un alivio sustancial de la deuda y una recuperación impulsada por el empleo y los salarios para conjurar una década perdida en países como Chad, Ghana, Senegal, Túnez y Zambia. En un momento en que se reclama una reforma estructural global, los recortes a los fondos de jubilación en Ghana se burlan del concepto de reparto justo de la carga entre las instancias financieras internacionales y la gente trabajadora africana. Para salir de su trampa de la deuda, los países africanos necesitarán más que recortes en el gasto del sector público, los cuales de hecho serían contraproducentes. En su lugar, necesitan alivio de la deuda, reformas e inversiones sin precedentes.

Este año, el *Informe sobre el Desarrollo Mundial* del Banco Mundial explora el tema de la migración. El tema es oportuno, ya que la Unión Europea aumenta la presión sobre los países del norte de África para frenar la marea de personas migrantes de la región y de todo el continente africano, y el Banco tiene razón al afirmar que la migración “puede ser una fuerza para la prosperidad”. Sin embargo, en ausencia de plenos derechos legales y protecciones sociales, las personas migrantes son especialmente vulnerables a condiciones de trabajo de explotación y peligro que perpetúan una carrera mundial a la baja en las normas del trabajo que empobrece al conjunto de la gente trabajadora y enriquece a unos pocos. Las políticas de empobrecimiento del vecino no pueden romper este ciclo; sin inversiones adecuadas en la capacidad del sector público y la prestación de servicios sociales, los dirigentes nacionales corren el riesgo de recurrir a políticas oportunistas desde el punto de vista político pero inhumanas, incluidas las expulsiones masivas y el maltrato de la gente trabajadora migrante. Para romper aquí el ciclo de la brutalidad, las instituciones financieras internacionales (IFI) deberían promover un desarrollo sostenible que pueda garantizar una vida digna a la gente trabajadora de cada país, de forma que la migración sea una auténtica elección y no una opción guiada por la presión económica y el aumento de las desigualdades.

Al poner en práctica nuevas ideas, el Banco Mundial y el FMI pueden ayudar a Marruecos, a la región MENA y al continente africano a trazar un nuevo rumbo y a romper el ciclo de deuda y subdesarrollo. Para ello, las IFI deberían aportar su experiencia política a fin de ayudar a los países a aplicar reformas fiscales progresivas que promuevan la igualdad y desincentiven la especulación; deberían ayudar a las empresas estatales a prestar servicios que satisfagan las necesidades actuales en lugar de privatizarlas; y deberían apoyar a los países que utilizan la política industrial para construir economías más igualitarias y sostenibles en lugar de sumarse a una carrera mundial a la baja.

### **Un camino necesario: el multilateralismo basado en la solidaridad**

Un número creciente de trabajadores y trabajadoras del mundo vive en países cada vez más endeudados y con menor peso en la gobernanza económica mundial; son muchos los países donde la esperanza de un desarrollo sostenible y equitativo se ha ido desvaneciendo desde hace más de una generación. Y en casi todos los Estados, tanto en los países de altos ingresos como en los de bajos ingresos, la gente trabajadora se enfrenta a salarios reales en declive, deudas en aumento y servicios públicos vaciados. El auge de los movimientos políticos de extrema derecha y fascistas solo puede entenderse en este contexto, y no sorprende que poderosos agentes del mundo entero ataquen al movimiento sindical y otras formas de organización que pueden ofrecer un futuro mejor. Los crecientes llamamientos en favor de un Nuevo Contrato Social proceden del conjunto de la población mundial que ha quedado al margen de la arquitectura financiera mundial, y para el Banco Mundial y el FMI ignorar o subestimar sus demandas supone el riesgo de socavar su legitimidad en estos tiempos difíciles.

Las instituciones multilaterales también se enfrentan a una crisis de coherencia, ya que, si bien se han asumido compromisos internacionales para fortalecer el trabajo decente y ampliar la

protección social, en particular a través de los ODS, el asesoramiento y las prácticas de préstamo de las instituciones financieras internacionales a menudo van en contra de estos objetivos. Existe una necesidad urgente de reformar nuestro sistema multilateral para garantizar que las políticas de las IFI sean coherentes con los objetivos internacionales acordados y con las normas internacionales del trabajo que han sido minuciosamente negociadas y acordadas entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

El momento actual exige nuevas reglas del juego y estas ofrecen oportunidades para la solidaridad y el cambio. Un multilateralismo renovado puede proporcionar la fuerza y la legitimidad para emprender los audaces proyectos que necesitamos en este momento: reformar nuestro “no sistema” fallido para la resolución de la deuda soberana, invertir en una transición energética sin dejar atrás a las comunidades, garantizar la protección social universal y apoyar un crecimiento integrador a través de un trabajo decente caracterizado por un diálogo social coherente, la libertad sindical y la negociación colectiva; en otras palabras, un Nuevo Contrato Social.

## **Recomendaciones para las instituciones financieras internacionales**

- Garantizar que los fondos destinados a la reconstrucción en Marruecos, Turquía, Ucrania y otros países que lo necesiten garanticen un trabajo decente, que conlleve libertad sindical y negociación colectiva, así como la salud y la seguridad tanto de la gente trabajadora como de las comunidades a las que dirigen sus proyectos.
- Reforzar la inversión para hacer frente a importantes retos mundiales de forma transparente, controlada democráticamente y sostenible.
- Apoyar los llamamientos para reformar la actual arquitectura financiera internacional con el fin de abordar la creciente carga de la deuda y las desigualdades sistémicas, en particular el elevado costo de los préstamos, el limitado acceso a la liquidez para los países en desarrollo y la volatilidad de los flujos de capital.
- Comprometerse a aliviar la deuda multilateral.
- Colaborar estrechamente con los sindicatos para garantizar que toda la financiación de la lucha contra el cambio climático esté en consonancia con una transición justa para los trabajadores y las trabajadoras, que incluya (pero sin limitarse a) la transición energética, con criterios de referencia sobre la participación de la gente trabajadora a través del diálogo social, las evaluaciones de impacto y el diálogo colectivo que abarquen el trabajo decente, la formalización, las infraestructuras resilientes, los sistemas y protecciones adaptados a las nuevas realidades climáticas, la protección social y la energía asequible y sostenible para todos.
- Proporcionar a los países inversiones y asistencia técnica para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y poner fin a las perjudiciales privatizaciones oportunistas.
- Adoptar un enfoque de los retos mundiales, en particular la migración, basado en los derechos que proteja a la gente trabajadora, promueva el desarrollo sostenible y evite la mercantilización y la explotación de trabajadores y trabajadoras.
- Consultar de forma significativa a los sindicatos, en su calidad de representantes de la gente trabajadora elegidos democráticamente, para la formulación de sus políticas económicas, sociales y laborales, así como en el asesoramiento técnico proporcionado a los países, en particular las evaluaciones de impacto social.

### **Los sindicatos recomiendan al FMI:**

- Reforzar la aplicación de sus niveles mínimos de gasto social respetando plenamente las normas internacionales del trabajo a fin de garantizar el espacio fiscal necesario para una recuperación sólida e integradora; estos gastos deben ser un verdadero nivel mínimo y no un techo máximo. Además, el Fondo debería reforzar su apoyo a los Estados para aumentar los ingresos destinados a la protección social, en lugar de promover recortes del gasto social bajo el pretexto de la sostenibilidad.
- Utilizar su posición para fomentar el apoyo y el compromiso renovado en favor de un mecanismo global, justo y vinculante para reestructurar la deuda soberana de

conformidad con la Resolución A/RES/69/319 de las Naciones Unidas y considerar la necesidad de inversiones sociales y climáticas dentro de los análisis de la deuda.

- Emitir derechos especiales de giro (DEG) adicionales en respuesta a las necesidades mundiales y ayudar a la reasignación de los DEG existentes de los países de altos ingresos a los países en desarrollo a través de fondos fiduciarios específicos, transferencias directas u otras instituciones.
- Proteger de forma proactiva a la gente trabajadora y sus fondos de jubilación de los efectos injustos de las reestructuraciones de la deuda interna, y trabajar con los países deudores para encontrar alternativas constructivas que no perjudiquen a la gente trabajadora ni a los ciudadanos.
- Incrementar la transparencia de las negociaciones entre el FMI y los países para que puedan alcanzarse acuerdos sostenibles a través del diálogo social.
- Apoyar reformas fiscales progresivas que reduzcan la desigualdad, en particular, impuestos sobre las transacciones financieras que desincentiven la especulación y fomenten la inversión.
- Poner fin a las limitaciones de la masa salarial pública que socavan la calidad del empleo y la contratación de trabajadores y trabajadoras esenciales en el sector público, particularmente personal de enfermería, docentes y personal del transporte, que son indispensables para la consecución de los ODS.
- Flexibilizar los préstamos y adaptarlos a las necesidades de los prestatarios, limitando las condiciones y poniendo fin a los recargos regresivos que endeudan aún más a los países con problemas económicos y dificultan la recuperación mundial.

#### **Los sindicatos recomiendan al Grupo del Banco Mundial:**

- Promover políticas del mercado laboral que fomenten el trabajo decente, basado en la libertad sindical y el diálogo social, en lugar de la precarización y la informalización, también en el marco de su próxima declaración sobre política laboral.
- Apoyar las inversiones en una protección social verdaderamente universal, en consonancia con las normas internacionales del trabajo, para luchar contra la pobreza, promover la equidad de manera efectiva y hacer frente a la falta de protección social de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal y de las formas atípicas de empleo.
- Eliminar el tema laboral del proyecto B-Ready, el cual fomentará el empleo precario y de baja calidad y socavará la protección social.
- Abordar los desafíos estructurales a la igualdad incorporando la necesidad de instituciones sólidas del mercado laboral en la estrategia del Banco para mejorar las condiciones de las mujeres, de la gente trabajadora migrante, la gente trabajadora joven, la gente trabajadora del sector informal y otras poblaciones marginadas.

- Colaborar con los sindicatos para evitar prácticas de explotación en los proyectos de desarrollo:
  - Evaluar sus repercusiones en el mercado laboral y sus efectos distributivos antes de su aprobación por el Consejo.
  - Promover la igualdad de género en el empleo, particularmente en los sectores dominados por los hombres.
  - Mejorar la aplicación de las salvaguardias y la gestión de las quejas, especialmente plazos firmes para identificar las infracciones de las normas de desempeño, desarrollar un plan de acción correctiva basado en el tiempo y resolver cualquier infracción.
- Apoyar una fuerte inversión en sanidad pública, educación y transporte sostenible y accesible, así como en sistemas universales de protección social basados en los derechos para garantizar una vida digna a las personas.